



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Villavicencio, veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 50 001 23 33 000 2020 00322 00
MEDIO DE CONTROL: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
ASUNTO: DECRETO 072 DEL 13 DE ABRIL DE 2020, PROFERIDO POR EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ (META)

Procede el despacho a establecer si el acto administrativo de la referencia, es o no susceptible del control inmediato de legalidad, conforme a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

La Alcaldía del Municipio de Puerto López (Meta), en supuesto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del CPACA, remitió el Decreto No. 072 del 13 de abril de 2020, **"POR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META"**, a efectos de que el Tribunal Administrativo del Meta, se pronuncie sobre su legalidad.

El conocimiento del asunto correspondió al Despacho 005, a cargo de la suscrita, según se advierte del Acta de Reparto del 17 de abril de 2020.

II. CONSIDERACIONES

a) Competencia del Despacho:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 14 del artículo 151 del CPACA, y teniendo en cuenta que no se trata de una demanda, ni aun ha iniciado el trámite o proceso, razón por la cual la presente providencia no se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 125 del mismo estatuto procedimental, en armonía con los numerales 1-4 del artículo 243 ibídem, el magistrado ponente es competente para estudiar si el presente caso es susceptible del control inmediato de legalidad de que trata el artículo 136 ibídem.

b) Problema Jurídico:

Corresponde al Despacho determinar si el acto administrativo atrás referido, cumple los requisitos de ley que lo hacen ser susceptible del control inmediato de legalidad.

Para efectos de establecer lo anterior, se hará referencia a (i) los requisitos señalados en la ley que dan lugar al control inmediato de legalidad, y, (ii) se resolverá el caso concreto.

c) Requisitos de procedibilidad del control inmediato de legalidad:

La Constitución Política, en el Título VII (De la Rama Ejecutiva), Capítulo 6° (Arts. 212, 213 y 215) habilita al Presidente de la República, con ciertos requisitos, por unas causas precisas y con unas facultades también determinadas, a declarar los Estados de Excepción denominados: (i) Estado de Guerra Exterior, (ii) Estado de Conmoción Interior y (ii) la Emergencia Económica, Social y Ecológica, cuya Ley Estatutaria que los desarrolla es la Ley 137 de 1994, revisada previamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-179 de 1994.

Ese último Estado de Excepción *-Emergencia Económica, Social y Ecológica-*, que es el que en esta ocasión nos interesa, responde a hechos que amenacen o perturben grave e inminentemente el orden económico, social y ecológico o constituyan grave calamidad pública, por lo que el Gobierno Nacional tiene facultades para expedir los decretos con fuerza de ley que considere necesarios para superar la situación e impedir la extensión de sus efectos.

En virtud de lo anterior, y en atención a la pandemia provocada por el Coronavirus (COVID-19) declarada como tal el 11 de marzo del año en curso, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno Nacional expidió el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020¹, declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por el término de 30 días calendario.

El artículo 20 de la Ley 137 de 1994 establece que, *"Las medidas de carácter general que sean dictadas **en ejercicio de la función administrativa** y como **desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción**, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición"* (Subrayado fuera de texto).

A su vez, el artículo 136 del CPACA establece que *"Las medidas de carácter general que sean dictadas **en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción**, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.*

¹ "por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional"

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento”.

Así pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado², el control de legalidad se refiere a uno de naturaleza automática constituido como garantía de los derechos de los ciudadanos y para el mantenimiento de la legalidad en abstracto en relación con los poderes del Ejecutivo durante los Estados de Excepción. Además, esa Corporación ha esquematizado los presupuestos de procedencia del referido medio de control, en consonancia con las normas transcritas previamente, así:

“(…) En la anotada dirección y con el fin de esquematizar los presupuestos de procedibilidad del aludido control inmediato de legalidad, la jurisprudencia de esta Sala ha precisado lo siguiente:

“De acuerdo con esta regla son tres los presupuestos requeridos para la procedencia del control inmediato de legalidad, a saber:

- 1. Que se trate de un acto de contenido general.*
- 2. Que el mismo se haya dictado en ejercicio de la función administrativa, y*
- 3. Que el acto tenga como fin el desarrollar uno o más de los decretos legislativos expedidos en los estados de excepción” (...)³. (Subrayado fuera del texto)*

De lo anterior surge claramente, que como quiera que se trata de un control judicial de naturaleza excepcional, necesariamente el incumplimiento de cualquiera de tales condicionamientos, impide que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, asuma el conocimiento por esa vía y por ende efectúe un juicio de legalidad sin que medie demanda alguna.

d) Análisis del caso concreto:

En el presente asunto, como se mencionó inicialmente, la entidad territorial, pretende que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del CPACA, se examine la legalidad del acto administrativo proferido por su mandatario; sin embargo, de entrada es palmario que no reúne uno de los requisitos atrás señalados para que sea susceptible de control judicial de manera automática, como quiera que de su misma motivación se extrae que no fue expedido en desarrollo del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, declarado por el Presidente de la República mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

² Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 31 de mayo de 2011. Radicado 11001-03-15-000-2010-00388-00(CA). CP: Gerardo Arenas Monsalve.

³ *Ibidem*.

Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con su parte motiva, el acto remitido para su revisión fue proferido con fundamento en ejercicio de las facultades ordinarias de orden constitucional y legal. Los siguientes artículos del orden constitucional fueron invocados: (i) el 2, sobre los fines del Estado; (ii) el 24 que instituye el derecho a la libre circulación; (iii) el 44 que consagra los derechos de los niños y su prevalencia sobre los derechos de los demás; (iv) el 45, concerniente a los derechos de los jóvenes y adolescentes; (v) el 46 que desarrolla la obligación del Estado, la sociedad y la familia de concurrir para la protección y asistencia de las personas de la tercera edad; (vi) el 49 que se refiere a la atención en salud y saneamiento ambiental; (vii) el 95 que hace alusión a la calidad de colombiano y a los deberes de las personas y ciudadanos; y (viii) el 315 que fija las facultades de los alcaldes.

Asimismo, el decreto remitido hizo alusión a las siguientes disposiciones normativas de orden legal. Primero, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994⁴, modificado por Ley 1551 de 2012 que, en relación con el orden público, dispone una serie de funciones en cabeza de los alcaldes. Segundo, el artículo 44 de la Ley 715 de 2001⁵ referente a las competencias de los municipios en materia de dirección y coordinación

⁴**Ley 136 de 1994, artículo 91:** "*Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:*> Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo."

En dicha norma, se disponen las funciones en relación con el Concejo, con el orden público, con la Nación, con el departamento y a las autoridades jurisdiccionales, la administración municipal, la ciudadanía, prosperidad integral de su región.

En lo que refiere al orden público, dispuso lo siguiente:

"b) En relación con el orden público:

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;

b) Decretar el toque de queda;

c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;

d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley;

e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 90 del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.

3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito.

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.

El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los alcaldes, un informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía del municipio, el cual deberá ser publicado en la página web de la Policía Nacional.

5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural.

Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.

PARÁGRAFO 1o. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales.

PARÁGRAFO 2o. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo;"

⁵*Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros."*

del sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción. Tercero, el artículo 5 la Ley 1751 de 2015⁶ que indica las obligaciones del Estado en relación con el derecho fundamental a la salud. Cuarto, el artículo 12 de la Ley 1523 de 2015⁷ sobre la calidad de los gobernadores y alcaldes de conductores del sistema nacional de riesgo en su nivel territorial y las competencias asignadas en virtud de lo anterior. Quinto, los artículos 198 y 202 de la Ley 1801 de 2016⁸, los cuales, respectivamente, revelan que el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes municipales son autoridades de policía, e indican las competencias de los gobernadores y alcaldes antes situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar sus efectos.

Además, el acto remitido también invoca en sus consideraciones el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 [sic]⁹; el Decreto 418 de 18 de marzo de 2020¹⁰; el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020¹¹ y el Decreto 531 del 08 de abril de 2020¹². Asimismo, el decreto remitido exterioriza que mediante Decreto 058 del 22 de marzo de 2020, el alcalde municipal adoptó la medida de aislamiento preventivo obligatorio en cumplimiento de las órdenes impartidas por el Presidente de la República. Asimismo, que la Gobernación del Meta expidió el Decreto 243 del 21 de abril de 2020 *"POR EL CUAL SE ACOGE EL DECRETO LEGISLATIVO [SIC] NO. 531 DE 2020 'POR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO' Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*.

Con fundamento en todo lo anterior, el acto remitido dispuso: (i) en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Nacional 531 de 08 de abril de 2020, adoptar la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del Municipio de Puerto López (Meta), a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lo anterior, (ii) se autorizó el derecho de circulación de las personas en treinta y cinco (35) casos o actividades, bajo las condiciones allí reguladas; (iii) se permitió adicionalmente la circulación de las personas para ejecutar otras actividades prefijadas; (iv) dispuso una serie de medidas que debían desarrollar los responsables de la realización de cualquiera de las actividades exceptuadas en el artículo tercero del Decreto 531 de 2020; (v) se permitió el servicio público de transporte terrestre y fluvial de pasajeros, servicios postales y distribución de paquetería en el municipio de Puerto López (Meta) que sean estrictamente necesarios

⁶*Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones."*

⁷*Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones."*

⁸*Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana."*

⁹Aun cuando, por lo que parece ser un error, señala que su fecha de expedición es el 13 de marzo de 2020.

¹⁰*Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público"*

¹¹*Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público"*

¹²*Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"*

para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria causada por el referido virus y las actividades que los artículos 2 y 3 del decreto remitido autorizan; (vi) se limitó el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, pero no su expendio; (vii) se decretó el toque de queda en la jurisdicción del municipio de Puerto López por el término allí fijado y con unas excepciones; (viii) se hizo alusión a las implicaciones legales por la inobservancia de las medidas en instrucciones dadas y (ix) se dispuso las reglas de vigencia del acto remitido.

Al respecto, el despacho considera que aun cuando el acto administrativo en comento se refiere a varias decisiones del orden nacional proferidas con posterioridad al Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, e incluso al mismo acto declarativo, ello no implica que con el decreto remitido se esté desarrollando alguno de los Decretos Legislativos proferidos con ocasión de la declaratoria del prenotado Estado de Excepción, como pasa a exponerse.

En primer lugar, debe decirse que el Decreto que declara el Estado de Excepción -417 del 17 de marzo de 2020- de ninguna manera puede ser desarrollado directamente por las autoridades territoriales, porque corresponde al Gobierno Nacional expedir los Decretos Legislativos que adopten las medidas para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y solo para desarrollar éstos a nivel territorial, es que los mandatarios territoriales pueden dictar actos administrativos de carácter general, que vendrían a ser el objeto del control inmediato de legalidad. De allí que, en este asunto, aun cuando dice fundamentarse en el Decreto Declarativo 417 de 17 de marzo 2020, en realidad se sustenta en las facultades ordinarias antes citadas.

En segundo lugar, el Decreto 418 de 18 de marzo de 2020¹³ determina, entre otros, que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria causada por dicho virus, está en cabeza del Presidente de la República. Este acto administrativo se fundamenta en disposiciones constitucionales y legales, así como en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. De lo cual se extrae que no desarrolla el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, máxime si se atiende a que el mismo no es invocado expresamente como fundamento. Así las cosas, el uso por parte del acto administrativo territorial del Decreto 418 de 18 de marzo de 2020, no implica que aquel deba ser sometido al control inmediato de legalidad.

En tercer lugar, el acto administrativo remitido se refiere también al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020¹⁴. No obstante, debe aclararse también que el sustento de aquel, no es el Estado de Excepción, pues si se revisa su motivación, nada dijo el Gobierno Nacional sobre estar haciendo uso de las facultades propias de la *Emergencia*

¹³Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público"

¹⁴"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público."

Económica, Social y Ecológica, por el contrario, se sustenta esencialmente en normas de orden público, algunas de ellas, es cierto, son facultades dadas constitucional y legalmente para afrontar situaciones de anormalidad, pero tales circunstancias no son necesariamente las de un Estado de Excepción, y por ende se podría acudir a ellas sin necesidad de esta declaratoria, y también se menciona la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 declarada en la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 emanada del Ministerio de Salud y la Protección Social¹⁵, lo que indica que el 457 no es un decreto legislativo expedido por virtud del Estado de Excepción, de allí que su aplicación mediante el acto administrativo territorial no es de aquellos que deba someterse a control del legalidad.

Por último, el despacho observa que, en realidad, el acto territorial remitido pretende desarrollar el contenido del Decreto 531 del 08 de abril de 2020¹⁶. No obstante, si bien este fue expedido con posterioridad a la declaratoria del Estado de Excepción, el mismo no se trata de un decreto con fuerza de ley proferido con ocasión del Estado de Emergencia. Ello por cuanto las disposiciones que le sirvieron de fundamento están

¹⁵ Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. Esta Resolución a su vez fue dictada por el Ministro de Salud y Protección Social invocando las atribuciones contenidas en las siguientes normas:

- (i) El artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, *Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"*

ARTÍCULO 69. DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA Y/O EVENTOS CATASTRÓFICOS. El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá declarar la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos, cuando se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia o desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos que afecten la salud colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad de adaptación de la comunidad en la que aquel se produce y que la afecten en forma masiva e indiscriminada generando la necesidad de ayuda externa.

En los casos mencionados, el MSPS determinará las acciones que se requieran para superar las circunstancias que generaron la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos con el fin de garantizar la existencia y disponibilidad de talento humano, bienes y servicios de salud, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Cuando las acciones requeridas para superar dichas circunstancias tengan que ver con bienes en salud, la regulación que se expida deberá fundamentarse en razones de urgencia extrema.

Lo dispuesto en este artículo podrá financiarse con los recursos que administra el Fosyga o la entidad que haga sus veces, o por los demás que se definan.

- (ii) El artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social"*
Artículo 2.8.8.1.4.3 Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir o controlar la ocurrencia de un evento o la existencia de una situación que atenten contra la salud individual o colectiva, se consideran las siguientes medidas sanitarias preventivas, de seguridad y de control: a. Aislamiento o internación de personas y/o animales enfermos; b. Cuarentena de personas y/o animales sanos; c. Vacunación u otras medidas profilácticas de personas y animales; d. Control de agentes y materiales infecciosos y tóxicos, vectores y reservorios; e. Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas; f. Clausura temporal parcial o total de establecimientos; g. Suspensión parcial o total de trabajos o servicios; h. Decomiso de objetos o productos; i. Destrucción o desnaturalización de artículos o productos si fuere el caso; j. Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos.
- (iii) El artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, *Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social.*
Artículo 2. Funciones. El Ministerio de Salud y Protección Social, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes: /.../

¹⁶ Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"

dirigidas a regular del orden público, además, en este caso, el Gobierno Nacional tampoco dijo algo en relación con estar haciendo uso de las facultades propias de la emergencia, sólo se observa una referencia al Decreto Legislativo 439 del 20 de marzo de 2020.

Así las cosas, el Decreto No. 072 del 13 de abril de 2020 no se trata de un acto administrativo que deba ser sometido a control inmediato de legalidad, aun cuando fue expedido con posterioridad a la fecha en que se profirió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, pues aquel fue emitido en ejercicio de facultades netamente ordinarias, así sea para situaciones de anormalidad, y si bien se funda y desarrolla decretos emitidos por el Gobierno Nacional, éstos no surgieron en virtud del decreto que declaró el Estado de Excepción.

Con esto, lo que se quiere significar es que el objeto de revisión automática o inmediata de la legalidad que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el ámbito territorial, debe ceñirse estrictamente a aquellos actos administrativos territoriales que ejecutan o aplican los decretos legislativos que adoptan las medidas por parte del Gobierno Nacional "*destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos*"¹⁷. De tal manera que, todo lo que se encuentre por fuera de esa zona, acudiendo a otro tipo de facultades que existen en el ordenamiento jurídico, pero que no son desarrollo de esos decretos legislativos, se escapa al medio de control que hoy nos ocupa.

Así las cosas, y en atención a que el Decreto remitido, no es un acto administrativo que deba someterse al control inmediato de legalidad, dispuesto en los artículos 136 y 185 del CPACA, no se asumirá el conocimiento del mismo.

Finalmente, resulta pertinente aclarar que si bien es cierto en providencias similares a ésta, se venía exhortando a las autoridades administrativas, para que en lo sucesivo se abstuvieran de remitir actos administrativos distintos a aquellos susceptibles de control inmediato de legalidad, conforme a las elementales reglas y requisitos atrás señalados, y según tesis sostenida por este despacho y atrás desarrollada; a partir de esta fecha se abandonará tal práctica del exhorto, en tanto al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se ha suscitado un variopinto de tesis a nivel nacional, una de ellas derivada del auto de ponente proferido por un despacho de la Sección Segunda del Consejo de Estado¹⁸, a la cual se oponen los autos también de ponente de las Secciones Primera¹⁹ y Quinta²⁰, éstos últimos contentivos de la tesis aplicada por este Tribunal y que seguirá sosteniendo hasta tanto se produzca una unificación

¹⁷ Constitución Política, artículo 215, inciso segundo.

¹⁸ Auto del 15 de abril de 2020, C.P. William Hernández Gómez, radicado 110010315000 2020 01006 00

¹⁹ Auto del 31 de marzo de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado 110010315000 2020 00958 00

²⁰ Auto del 31 de marzo de 2020, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado 110010315000 2020 00950 00

jurisprudencial, o línea mayoritaria que permita darle mayor fuerza a los argumentos de la tesis contraria a la que hoy sostenemos.

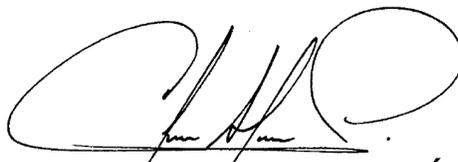
Aunado a lo anterior, no sobra indicar que ello no significa que el acto en cuestión no sea susceptible de control judicial, como quiera que siendo un acto proferido en uso de facultades ordinarias, puede ser enjuiciado a través de los medios de control ordinarios previstos en el CPACA, entre ellos, la nulidad, para los cuales deberá mediar una demanda con los requisitos de ley.

En mérito de lo expuesto, el Despacho 005 del Tribunal Administrativo del Meta,

R E S U E L V E:

- PRIMERO:** **NO ASUMIR** el conocimiento de control inmediato de legalidad sobre el Decreto No. 072 del 13 de abril de 2020, expedido por la Alcaldía del Municipio de Puerto López (Meta), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
- SEGUNDO:** Notifíquese la presente decisión al alcalde del Municipio de Puerto López (Meta) y al Delegado del Ministerio Público, como lo indica el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del C.G.P, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico exclusivo para notificaciones judiciales de que trata el artículo 197 del C.P.A.C.A.
- TERCERO:** Por Secretaría, publíquese la presente decisión, a través del espacio que ostente este Tribunal en el sitio web de la Rama Judicial, y en la página web y la red social TWITTER del Tribunal Administrativo del Meta.
- CUARTO:** Una vez ejecutoriada esta providencia, como ha sido tramitado de manera netamente digital, archívese el expediente en la misma forma, dejando las constancias del caso y con las seguridades que ello exija.

NOTIFÍQUESE.



CLAUDIA PATRICIA ALONSO PÉREZ
MAGISTRADA